

Políticas sociales, modelo de desarrollo y subjetividad de grupos vulnerables en Chile

**Catalina Arteaga Aguirre e
Isidora Iñigo Valderrama**

Catalina Arteaga Aguirre

Doctora en Ciencias Políticas y Sociales, Mención Sociología (2007), por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Maestra en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede Académica de México. Ha desarrollado labores de investigación, docencia y consultoría en México y Chile: FLACSO-México, UAM, Universidad de Arte y Ciencias Sociales (ARCIS) y desde 2006 es profesora del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Ha participado en investigaciones y estudios vinculados a instituciones nacionales y extranjeras: Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), CLACSO, University College London, FLACSO-México, Secretaría de Economía (México). Docente en metodología, con énfasis en el enfoque cualitativo y el uso de *software* para el análisis de datos. Ha investigado y publicado en temáticas de género, familia, pobreza, modernización y subjetividades e identidades.

Las comunicaciones con la autora pueden dirigirse a:
Universidad de Chile
Departamento de Sociología
Av. Capitán Ignacio Carrera Pinto N° 1045, Ñuñoa
Santiago - Chile
E-mail: carteaga@u.uchile.cl

Isidora Iñigo Valderrama

Licenciada en Sociología (2009), Universidad de Chile. Magíster en Filosofía (2013) por la Universidad de Chile. Actualmente es académica en la Universidad Católica Raúl Silva Henríquez. Ha impartido cursos relacionados con metodologías para la investigación, teoría social y teoría política. Participa en la consultora Inclusión y Equidad, y en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile en estudios vinculados a política, políticas públicas, pobreza, género, derechos humanos y subjetividad. Destaca su participación en estudios a nivel latinoamericano para organismos como ONU Mujeres, UNICEF y BID. Se ha desempeñado como asistente de investigación en proyectos que cuentan con financiamiento estatal (CONICYT).

Las comunicaciones con la autora pueden dirigirse a:
Universidad Católica Raúl Silva Henríquez
Departamento de Sociología
General Jofre 462
Santiago - Chile
E-mail: iinigo@ucsh.cl

En el caso de Chile, el modelo neoliberal desarrollado en las últimas décadas se utiliza como referente en el campo de la educación, de la salud, de la vinculación con el Estado y las políticas públicas.

Políticas sociales, modelo de desarrollo y subjetividad de grupos vulnerables en Chile*

Introducción

Como ha sido documentado en distintos trabajos en el caso de Chile (Garretón, 2007 y 2012; Quintral, 2012), el modelo neoliberal desarrollado en las últimas décadas en el país, ha enfatizado el rol del mercado y su dinámica en el funcionamiento institucional, orientando las relaciones entre los distintos actores de la sociedad. Dicho modelo se utiliza como referente en el campo de la educación, de la salud, de la vinculación con el Estado y las políticas públicas. Además de la incidencia en los ámbitos señalados, algunos estudios indagan en la influencia que dicho paradigma ha tenido en términos de las relaciones sociales, refiriéndose a la acentuación de la mercantilización (Fraile, 2009; Riesco, 2009), la competencia y la aceleración de procesos de individualización. En efecto, sus consecuencias han sido variadas, aunque aún poco exploradas en términos de los sujetos y sus relaciones cotidianas. Particularmente, en este trabajo interesa destacar algunas construcciones discursivas de sujetos vulnerables en relación con el Estado y la comunidad, a partir de las justificaciones y discursos que despliegan frente a las prácticas que llevan a cabo en contextos de crisis socioeconómica.

La relación entre discursos y prácticas ha sido explorada desde hace décadas por las ciencias sociales y las distintas vertientes que analizan el discurso y el lenguaje como parte de la vida cotidiana, y consideran el lenguaje como constitutivo, dinámico e involucrado en la construcción de la realidad. El discurso es una práctica que lleva a cabo acciones y tiene un carácter productivo con respecto a la realidad social (Martínez-Guzmán e Íñiguez, 2010; Íñiguez, 2003). Las formas en que cotidianamente las personas acceden a los discursos institucionales -a través de los medios de comunicación y del contacto con los distintos organismos del Gobierno, organizaciones sociales e

Recibido: 07-04-2014. Aceptado: 09-01-2015.

(*) Este trabajo se realizó con el apoyo del Fondo de Innovación en Investigación del Proyecto Iniciativa Bicentenario Juan Gómez Millas, Universidad de Chile.

Es posible encontrar reproducciones y sentidos recurrentes en las formas en que sujetos vulnerables, enfrentados a situaciones de crisis socioeconómica, llevan a cabo acciones y despliegan discursos que las fundamentan.

instituciones- inciden en las representaciones que se hacen respecto de sí mismas y de los otros, lo que, a su vez, influye en diversas modalidades de comportamiento y construye argumentaciones respecto de sus prácticas. Como señalan Grau ...[et al] (1997), los medios de comunicación son centrales y decisivos para las operatorias de producción y distribución de los discursos y de las representaciones simbólicas de grupos particulares. Asimismo, las representaciones sociales que se encuentran presentes en los discursos institucionales y cotidianos transmiten formas de legitimación, valoraciones, creencias y preceptos morales acerca de lo valorado y criticado socialmente. En tanto fenómenos sociales, las representaciones sociales sedimentan un conjunto de imágenes, símbolos y códigos clave a los que se recurre para conocer el mundo, ubicarse en él, organizarse y actuar (Jodelet, 1984).

Desde esta perspectiva, las orientaciones ideológicas, técnicas y políticas que sustentan las políticas sociales de las últimas décadas tienen un impacto y una relación particular en los individuos en el Chile contemporáneo. Los procesos sociopolíticos, económicos y culturales se inscriben en las existencias individuales (Martuccelli, 2007), lo que se expresa -entre otros aspectos- en las modalidades en que los sujetos fundamentan discursivamente sus acciones frente a determinados contextos particulares. La relación, sin embargo, es dinámica y diversa; no deriva directa y unívocamente de los mandatos discursivos institucionales; los sujetos construyen discursos, prácticas y argumentaciones -también- más allá de lo oficial. Partiendo de dicha constatación, es posible, no obstante, encontrar reproducciones y sentidos recurrentes en las formas en que sujetos vulnerables, enfrentados a situaciones de crisis socioeconómica, llevan a cabo acciones y despliegan discursos que las fundamentan. Aparece así un relato distinto, particular, que reinterpreta también códigos socialmente disponibles.

En el presente trabajo se profundiza en aquellas significaciones que aparecieron de manera recurrente en los argumentos de un conjunto de entrevistados a partir del relato de las prácticas sociales desarrolladas en un contexto de crisis socioeconómica. Para el estudio se define la “crisis” de manera general, en referencia a algún evento socioeconómico que afectara a la familia en los dos años anteriores a la entrevista en términos de sus ingresos; se preguntaba a las personas acerca de su percepción actual en términos de su situación socioeconómica y, posteriormente, se les pedía que describieran el episodio

más complejo para la economía familiar vivido en los últimos dos años. La idea fue permitir a los mismos entrevistados que definieran y describieran lo que para ellos era considerado como crítico y las modalidades en que resolvieron dicha situación, el recorrido para la superación de ese momento, los recursos y oportunidades a los cuales accedieron -y a los que no acudieron-, así como las significaciones y justificaciones asociadas a dichas prácticas.

En los relatos de las personas entrevistadas emergen expresiones y sentidos vinculados a la lógica desplegada por las políticas sociales en las últimas décadas, así como el marco valorativo más amplio relacionado con el modelo neoliberal en desarrollo en el país.

El estudio de las consecuencias subjetivas del modelo neoliberal chileno puede rastrearse en algunos importantes trabajos que se han desarrollado en las últimas décadas. Uno de los aportes más influyentes en este sentido fue el informe del PNUD de 1998, donde se hacía referencia a la emergencia de un malestar subjetivo frente a la modernización del país en distintas esferas. Norbert Lechner (2002), coordinador de dicho informe, desarrolló otros escritos cuya reflexión se vinculó, entre otros aspectos, a la relación entre modelo de desarrollo, política y subjetividad. Más recientemente, la tesis del malestar ha sido retomada a partir de las movilizaciones del año 2011 en torno a la educación (Mayol y Azócar, 2011), en una vertiente más política que busca comprender dichas acciones. Desde una mirada más específica, este trabajo se enmarca en el análisis de las modalidades en que los sujetos desarrollan prácticas para hacer frente a la vulnerabilidad y los significados y fundamentos que señalan para recurrir o no usar determinados recursos. Dicha cuestión se vincula, más profundamente, al problema de la construcción de las seguridades y certidumbres sociales y su relación con los distintos ámbitos institucionales. El modelo neoliberal pone en cuestión y tensión los referentes clásicos de seguridad de los individuos, lo que fragiliza las trayectorias y su estabilidad (Araujo y Martuccelli, 2013). Dicho proceso ha dado paso a modalidades de gestión individual del riesgo y a la movilización de redes cercanas (Arteaga y Martuccelli, 2012) para hacer frente a las contingencias cotidianas.

El artículo aborda, en primer lugar, el contexto de las políticas sociales y el sentido neoliberal de las mismas en las últimas décadas en Chile, para luego dar cuenta de los discursos y significados que sujetos sociales vulnerables despliegan para fundamentar sus prácticas en contextos de crisis socioeconómica. Dichos relatos muestran la

dinámica relación que existe entre discursos, prácticas institucionales y fundamentos subjetivos.

El trabajo cualitativo se basa principalmente en los resultados del estudio *Mediaciones subjetivas en tácticas de enfrentamiento del riesgo, de miembros no jefes de hogar, pertenecientes a familias vulnerables urbanas de la Región Metropolitana*¹. La investigación se llevó a cabo en familias de quintiles II y III² de distintas comunas de la Región Metropolitana y se basó en una estrategia metodológica cualitativa, a través de la aplicación de cuarenta entrevistas semi-estructuradas a jefes de hogar y miembros no jefes de hogar de estas familias, y cuatro grupos de discusión³. Las entrevistas se desarrollaron durante los años 2010 y 2011 en cinco comunas de la Región Metropolitana (La Pintana, San Bernardo, La Florida, Huechuraba y La Granja), a miembros de familias bi y monoparentales, en distintas etapas del ciclo vital familiar. Los criterios de selección de la muestra fueron: jefes/as de hogar y miembros de familias de quintiles II y III; hogares en etapa de expansión y consolidación; hogares monoparentales y biparentales; jefes de hogar con escolaridad completa e incompleta (Cuadro 1)⁴.

Cuadro 1
Criterios de selección de la muestra

Familias quintiles II y III	Etapa inicial y de expansión				Etapa de consolidación			
	Hogares monoparentales		Hogares biparentales		Hogares monoparentales		Hogares biparentales	
	Escolaridad incompleta	Escolaridad completa	Escol. incomp.	Escol. completa	Escol. incomp.	Escol. completa	Escol. incomp.	Escol. completa

La pauta de entrevista estuvo compuesta por una ficha de datos sociodemográficos y cinco dimensiones de indagación:

- Evento de riesgo: donde se buscó indagar en la caracterización, definición y valoración de la crisis socioeconómica más importante vivida por la familia en los últimos dos años.
- Prácticas: esta dimensión abordó, de manera cronológica, las prácticas y significados llevados a cabo por los distintos miembros de las familias en el contexto de la crisis.
- Recursos en relación al evento de riesgo: donde se indagó en los recursos utilizados y no usados por las familias en el proceso de crisis.
- Oportunidades: referido a las oportunidades desde el Estado, el mercado y la comunidad utilizadas y no usadas en el contexto de los eventos críticos.

El diseño, la planificación y la implementación de las políticas sociales están determinados por principios y normatividades básicas que, en conjunto con presupuestos económicos y variables de carácter sociopolítico, configuran los sistemas de política social que adoptan los gobiernos.

• Resultados de las prácticas: significados de la experiencia vivida para los miembros de las familias.

Para profundizar la indagación de los significados, valoraciones y referentes simbólicos respecto de los recursos, oportunidades y decisiones tomadas por las familias, se llevaron a cabo cuatro grupos de discusión con características similares a las entrevistas: dos de mujeres adultas, uno de hombres adultos y otro de jóvenes. El desarrollo de grupos permitió “la puesta en habla de la lengua social de un grupo” (Canales, 2006: 268). Esto es, permitió acceder a los ideales, a los referentes simbólicos y a las normatividades circulantes en el grupo que han influido en las tácticas de las familias.

Para el análisis del material se utilizó el tipo de categorización de la Teoría Fundamentada, a través de la generación de códigos en distintos niveles de manera inductiva. Esta estrategia metodológica implica el desarrollo de códigos mínimos a partir del material producido -en este caso, entrevistas y grupos de discusión-, en niveles de cada vez mayor abstracción, iniciando con una codificación abierta, luego axial y finalmente selectiva (Strauss y Corbin, 2002).

1. El sentido neoliberal de las políticas sociales en Chile

El diseño y la planificación, e incluso la implementación de las políticas sociales están determinados por principios y normatividades básicas que, en conjunto con presupuestos económicos y variables de carácter sociopolítico, configuran de manera fundamental los sistemas de política social que adoptan los diferentes gobiernos (Hall y Midgley, 2004; Franco y Lanzaro, 2006). Los diferentes análisis coinciden en que la emergencia de los principios fundamentales del modelo de política social chileno actual se ubica en la década del 70 del siglo pasado, con las transformaciones que un grupo de economistas chilenos neoliberales, educados en EE. UU. -los llamados “Chicago Boys”-, impulsaron en el modelo de desarrollo, al alero del régimen dictatorial de Augusto Pinochet. Esta experiencia ha sido considerada mundialmente como uno de los primeros -y exitosos- intentos por llevar a cabo tales principios. Sin embargo, los logros, en términos de equilibrio macroeconómico y niveles de crecimiento, contrastan con los importantes costos que estas medidas han tenido sobre las variables sociales, como las grandes desigualdades generadas y las dificultades que han incorporado en los procesos de integración social y de constitución identitaria (Araujo y Martuccelli, 2012).

Desde la segunda mitad de la década del 70 en adelante, se impulsó un proceso de “remercantilización” de los servicios y bienes sociales básicos y, por tanto, un retraimiento del Estado en su rol de provisor de bienestar.

Más allá del alcance real que tuvo la política social, propia del Estado de compromiso chileno -en términos de calidad y extensión de beneficios sociales hacia la población nacional⁵-, lo cierto es que, desde mediados de los 70 en adelante, esta cambió radicalmente sus principios orientadores, transitando de un Estado interventor, planificador, empresario y benefactor, hacia un modelo que ubica progresivamente al mercado como el actor central en estos ámbitos. Este proceso de transformación se ha desarrollado, hasta el momento, en dos etapas: “fundacional” -desde mediados de los 70 en adelante, en la que se impulsan las transformaciones más radicales en términos de modelo de gestión del riesgo y provisión del bienestar- y “consolidación” -que se inicia con el retorno a la democracia en los 90, caracterizada por la incorporación de innovaciones con el objetivo de corregir los costos sociales del modelo y así favorecer su estabilización-.

Etapa fundacional (1975-1989): retirada del Estado y posicionamiento del mercado como actor central en la provisión del bienestar

En un primer momento, desde la segunda mitad de la década del 70 en adelante, se impulsó un proceso de “remercantilización” de los servicios y bienes sociales básicos y, por tanto, un retraimiento del Estado en su rol de provisor de bienestar. Este proceso se agudizó con la crisis de la deuda de la década del 80 reflejándose en variables cuantitativas como la restricción del gasto⁶ y privatización de empresas estatales⁷ para generar nuevos ingresos. También en este período se diseñaron e implementaron las más importantes instituciones y mecanismos de provisión de servicios y bienes sociales que operan hasta hoy.

En efecto, para reorganizar el sistema de protección social de carácter estatista progresivamente desmantelado con estas transformaciones, el mecanismo utilizado fue la descentralización de la política social, traspasando gran parte de las responsabilidades tradicionales del Estado en la provisión de bienestar al sector privado y al informal (familia). Las funciones de la política social -financiamiento, diseño, implementación, supervisión y evaluación- se separan en diversos actores, concentrándose mayormente en el privado, cuestión que implica la inclusión del principio “el que puede, paga” en la gestión y provisión de bienes y servicios tradicionalmente públicos. La asignación de recursos se basa en la modalidad del “subsidio a la demanda”, creándose “cuasimercados” respecto de cada tipo de servicio a fin de generar competencia y libertad de elección. Bajo esta

La única área de acción tradicional de la política social que no se vio mermada, sino que, por el contrario, potenciada durante este período, fue la asistencia social.

modalidad, en vez de que el beneficio sea entregado directamente al usuario, este tiene la posibilidad de elegir dentro de las opciones que se le presentan. Sin embargo, ha sido notado que el riesgo que tiene este nuevo sistema es la marginación de los usuarios de más escasos recursos, quienes, en virtud de la baja cobertura y alto costo de estos servicios sociales básicos, quedan relegados, junto con sus familias, al abordaje casi autónomo de los problemas de desempleo, enfermedad, incapacidad física y mental, además de la muerte de sus miembros, sobrecargando a la familia de responsabilidades que muchas veces no puede asumir (Arriagada, 2006).

Durante este período se produjeron reformas emblemáticas en algunas de las áreas más importantes de la política social. En la salud se desarrolla el aseguramiento de salud privado a través de las ISAPRES⁸ (Instituciones de Salud Previsional). En la seguridad social, el sistema estatal es reemplazado por un sistema privado de administración de pensiones, AFP⁹. Finalmente, en la educación se traspasa la responsabilidad de administración de la educación escolar desde el Estado a las municipalidades, además de que se favorece la entrada de privados a través de la creación de colegios subvencionados o de financiamiento conjunto a través del cual el Estado otorga un porcentaje de los recursos necesarios para la educación por alumno, y la familia entrega el porcentaje restante¹⁰.

La única área de acción tradicional de la política social que no se vio mermada, sino que, por el contrario, potenciada durante este período, fue la asistencia social. Como es sabido, una de las consecuencias negativas más importantes de la crisis de la deuda fueron las altas tasas de desempleo y el consecuente aumento exponencial de la pobreza¹¹. Por ello, el Estado comenzó a diseñar y desplegar una serie de programas sociales enfocados en esta población, orientados a la mantención de su capital físico y humano por medio de transferencias monetarias o entrega de bienes y servicios, tales como “subsidios al consumo” -principalmente de alimentos- y programas de “empleo mínimo” (Cohen y Franco, 2006: 65). Para lograr llegar a esta población se implantaron una serie de instrumentos como la ficha CAS¹², creada en 1979, que identifica a las familias pobres e indigentes a fin de focalizar el gasto en dicha población; y la encuesta CASEN -Encuesta de Caracterización Socioeconómica- que permite caracterizar a los beneficiarios de la política social y evaluar el impacto de la misma¹³.

Con la llegada de la democracia se continuó con la privatización de empresas públicas y la incursión de sectores privados en la provisión del bienestar. Por otra parte, se produjo un aumento progresivo del gasto social, y se crearon nuevas instituciones, servicios sociales y programas de asistencia social.

Si bien estas iniciativas tenían originalmente un carácter temporal, tendieron a mantenerse en el tiempo y consolidarse como una de las principales funciones de la política social. Tal como se abordará en la segunda parte, estas transformaciones no solo tienen un impacto respecto a las condiciones materiales de vida, sino también configuran la subjetividad de las personas determinando, desde patrones de organización social y política, patrones de consumo e incluso la manera en que enfrentan períodos de premura económica.

Etapas de consolidación (a partir de 1990): el modelo neoliberal de política social reforzado

Con la caída de la dictadura y la consecuente llegada de la democracia, se introdujeron cambios graduales dentro de la política social que buscaban responder, en la medida de lo posible, a las demandas de los sectores medios y bajos por la mejora en sus condiciones de vida. El año 1990, mientras que la pobreza alcanzaba al 39% de la población (CEPAL, 2000) y el coeficiente de Gini se elevaba al 0,65% (Raczynski, 2002), el gasto social era un 11,88% del PIB (Robles, 2011). Así, sin alterar los principios económicos de la década pasada -patrón exportador de materias primas, participación fuerte de privados en la economía, mantención de equilibrios macro económicos-, y en un marco de prioridad sistémica a la agenda del crecimiento, atacar la pobreza se transformó en una necesidad político económica, pues altos niveles de pobreza y desigualdad ponían en riesgo tanto la gobernabilidad como la posibilidad misma del crecimiento económico (Hardy, 2004).

De esta manera, se buscó profundizar, perfeccionar y hacer más eficiente y eficaz el modelo neoliberal de gestión del riesgo. Por una parte, se continuó con la privatización de empresas públicas y la incursión cada vez mayor de sectores privados en la provisión del bienestar. Por otra parte, no solo se produjo un aumento progresivo del gasto social¹⁴, sino también se crearon nuevas instituciones, servicios sociales¹⁵ y programas de asistencia social. En el ámbito educativo, el Estado se preocupó de la calidad y equidad, y en la salud se fortalecieron los servicios públicos y municipales. Además, se profundizaron los procesos de descentralización de la ejecución de políticas públicas con la creación de gobernaciones regionales y el otorgamiento de mayores atribuciones a las municipalidades, además de fortalecer la participación de organismos no gubernamentales y fundaciones, sobre todo en las políticas para superación de la pobreza.

El tradicional receptor de beneficios y servicios del Estado se transformará ahora en un agente; es decir, se apelará a su capacidad de acción. La pobreza ya no será entendida meramente en función de los bienes y recursos que se poseen, sino más bien de los activos y capacidades.

A finales de la década del 90, estas medidas mostraron sus límites debido no solo a que los niveles de pobreza, aunque disminuidos, seguían siendo altos -la pobreza desciende a 22% en 1998-, sino también a los cambios en la estructura de riesgos de la sociedad chilena, condición que determinó transformaciones en la fisonomía de la pobreza que no estaban siendo consideradas¹⁶. Este marco exige una reconceptualización de la pobreza y de la manera en que se concebían las políticas sociales y las áreas que estas debían abordar. Ya no solo serán importantes las variables económicas, sino el capital social, la participación en el espacio público, el acceso al poder, y otros elementos culturales, sociales y políticos (CEPAL, 2006). Además, se abre la discusión en torno a la multidimensionalidad en la medición de la pobreza y se tornan relevantes otras categorías para comprender las situaciones de precariedad, empobrecimiento e inestabilidad. Es frente a esta situación que, a finales de la década del 90, se produce un punto de inflexión en los enfoques y conceptos, incorporando la noción de vulnerabilidad y el enfoque del manejo del riesgo social promovido por el Banco Mundial (Serrano, 2005).

Esta nueva mirada generó transformaciones que significaron un mejoramiento tanto de los niveles de pobreza como de los niveles de bienestar general de la población, sobre todo en las áreas de seguridad social¹⁷ y salud¹⁸. Sin embargo, lo que acá interesa rescatar por su impacto sobre la subjetividad es la nueva manera en la que se comprende tanto al sujeto de la política social como a la política misma y la relación entre ambos.

En efecto, el tradicional receptor de beneficios y servicios del Estado se transformará ahora en un agente; es decir, se apelará a su capacidad de acción. La pobreza ya no será entendida meramente en función de los bienes y recursos que se poseen, sino más bien de los activos y capacidades con los se cuentan o se puede contar para afrontar la estructura de riesgos de determinada sociedad¹⁹. Por lo tanto, los programas de superación de la pobreza estarán enfocados, precisamente, en entregar los activos y fortalecer capacidades, fomentar la figura del emprendimiento, apelando a la agencia de cada individuo y su familia para la superación de la situación desfavorecida.

La gran iniciativa de la política social que cristaliza esta nueva mirada, tanto a nivel latinoamericano como chileno, son los programas de transferencias condicionadas. En Chile, en el año 2002, se crea el Programa Chile Solidario, dirigido a familias en condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema²⁰, el que incorpora diversos

La política social se sigue articulando a través de un sistema que se basa en la responsabilidad individual y familiar de la gestión de riesgo y la provisión de bienes y servicios básicos. En este ámbito, el Estado está preocupado básicamente por apoyar a las familias imposibilitadas de acceder a estos pisos a través del mercado.

componentes -obtención de identidad formal, empleo, transferencias condicionadas a educación, salud y servicios básicos-, con la intención de fortalecer los activos de las familias y desarrollar en ellos mismos capacidades para superar su condición^{21 22}.

Sin embargo, más allá de los puntos de inflexión y transformaciones aquí reseñados, el modelo de política social de corte neoliberal adoptado en Chile desde la segunda mitad de la década del 70 mantiene hasta hoy sus principios orientadores centrales. Si bien ha existido un cambio de enfoque y mejoras en la calidad de vida -por medio del establecimiento de pisos mínimos de bienestar garantizados estatalmente-, la política social se sigue articulando a través de un sistema que se basa en la responsabilidad individual y familiar de la gestión de riesgo y la provisión de bienes y servicios básicos. En este ámbito, el Estado está preocupado básicamente por apoyar a aquellas familias imposibilitadas de acceder a estos pisos a través del mercado.

El vínculo con el despliegue y orientaciones de estas políticas es una particular construcción subjetiva que se va desarrollando en los grupos sociales que comparten una posición particularmente vulnerable. Los sujetos incorporan representaciones y discursos institucionales presentes en las orientaciones de las políticas públicas, lo cual configura parte de sus discursos y fundamentos a la hora de relatar sus experiencias ante crisis particulares.

2. Las consecuencias sociales y subjetivas del modelo: riesgo, incertidumbre e individualización

En el caso analizado, las y los entrevistados interrogados por las acciones desplegadas y aquellas no realizadas frente a situaciones de crisis socioeconómicas específicas, dan cuenta de la experiencia particular en relación con el vínculo con el Estado y la comunidad para hacer frente a dichos episodios. Más allá de una actitud psicológica particular, se encuentran discursos recurrentes y persistentes, cargados de afectos, que dan cuenta de reiteraciones en las modalidades de significar, percibir, sentir y actuar en relación al Estado y la sociedad.

En el marco de los principios neoliberales del enfoque sobre la vulnerabilidad y manejo del riesgo, cabría preguntarse ¿cuáles son los significados que este vehiculiza, y cuáles interpelan a los beneficiarios de la política social? Tal como lo señala Foucault (2007), uno de los rasgos distintivos del discurso neoliberal se relaciona con una nueva construcción de sujeto que apela a la capacidad de agencia, enalteciendo las dimensiones del esfuerzo individual y el emprendimiento.

En definitiva, el autor habla de “hacer de sí mismo una empresa” y, por tanto, gestionar sus capacidades y activos para la conformación de su propia identidad. Este tipo de significados se encuentra en las narrativas de los entrevistados, reflejado en expresiones como: *“yo creo que voy a tener que... no sé... indagar en otras cosas, no sé... vendedora de una tienda será, ir a hacer aseo, cuidar niños,... creo que yo misma como persona me voy a sentir más dignificada cuando yo genere algo, ¿me entiendes? Que sea de mí porque yo soy responsable de esta casa, yo soy responsable de las personas que habitan aquí”* (E²³. Alba). Este tipo de discurso es consistente con el enfoque adoptado por las políticas públicas. En efecto, estas no solo estarían orientadas a proveer de servicios y beneficios sociales sino que, además, tendrían cierta orientación que ha sido llamada moralizadora²⁴, ya que promueve y sanciona ciertos comportamientos en los individuos, derivados precisamente de estos principios neoliberales. Esta labor moralizadora aparece claramente en iniciativas como el “Chile Solidario”, programa de transferencias condicionadas que, como ya se señaló, se orienta por la lógica del fortalecimiento de capacidades buscando, en sus propias palabras, la “habilitación” de los beneficiarios, para que por sí mismos puedan enfrentar sus adversidades y superar su condición de pobreza²⁵, y, por ejemplo, en las políticas habitacionales y de vivienda social, las cuales exigen el ahorro familiar como requisito para recibir beneficios²⁶. Los montos exigidos están lejos de alcanzar a cubrir los costos de la vivienda, por lo que, más bien, el programa busca formar a sus beneficiarios, incentivando la voluntad, constancia y trabajo individual.

En esta misma línea, es posible plantear entonces que el hacer del Estado, y particularmente de la política social, establece diferentes clases de ciudadanos: aquellos que pueden suplir de manera autónoma sus necesidades -que no requieren ayuda estatal-; aquellos que requieren algunos soportes para generar una trayectoria social exitosa; y, finalmente, aquellos que necesitan asistencia del Estado para asegurar su existencia y necesidades básicas, y hacia los cuales se focaliza la política, o sea, los pobres. Así, recordando a Simmel (2002), los pobres no son una definición esencial de cierto grupo social, sino que más bien se definen como aquellos que legítimamente pueden recibir ayuda del Estado. No obstante, como ilustra Paugam (1991) para el caso de Francia, es posible advertir un cambio en la percepción social de la pobreza, desde su comprensión como injusticia social, a partir de la cual los poderes públicos debían hacerse cargo

La mayoría de los entrevistados intentaban distinguirse de la categoría de pobres. Mientras algunos se autodescribían como clase media o media baja, otros intentaban establecer distinciones simbólicas, cargadas de contenido moral, en vista de la imposibilidad de desconocer su precariedad económica.

de este problema, a la idea de la pobreza como una responsabilidad individual, donde los pobres deben hacerse cargo de sí mismos. Dicha concepción actual se advierte también en el caso chileno, donde se cuestiona la necesidad y legitimidad de la ayuda estatal para todos los que la necesiten. En ese marco, lo que muestran los relatos de los entrevistados es una fuerte valoración del esfuerzo individual y la autonomía, el hacer las cosas por sí mismos, sin la ayuda de otros: *“me gusta resolver mis cosas solo, o sea como si uno necesita tiene que saber rebuscárselas, no depender de otras personas, entonces por ahí más o menos yo a veces me siento orgulloso de ser así”* (E. Levy).

Los “otros” serían aquellos que “se dejan estar”, que no trabajan y no se esfuerzan por sus propios medios para salir de una situación de adversidad económica. Ellos son catalogados de “flojos”, que “les gusta que les den” las cosas; en palabras de Lautier (2009), los inútiles. En sociedades como la chilena, marcadas fuertemente por la distinción simbólica, la desigualdad (León y Martínez, 2011; Wormald y Torche, 2004) y el clasismo, son precisamente estos significados los que se asocian a la figura del pobre. Así, la mayoría de los entrevistados, cuando eran consultados sobre su clasificación socioeconómica, intentaban distinguirse lo más posible de dicha categoría. Para ello, utilizaban diferentes estrategias simbólicas de diferenciación y autodefinición. Mientras algunos se autodescribían directamente como clase media o media baja, otros intentaban establecer distinciones simbólicas, cargadas de contenido moral, en vista de la imposibilidad de desconocer su precariedad económica y condiciones de existencia. Así, existirían dos tipos de pobres: aquellos que se esfuerzan y trabajan, y aquellos que no lo hacen²⁷.

De hecho, el retraimiento del Estado como responsable en la provisión del bienestar, el abandono de una matriz solidaria de enfrentamiento del riesgo y el consecuente traspaso de esta tarea a los individuos, han estado acompañados de una serie de discursos y normatividades promovidos a nivel institucional y de discursos públicos orientados a proveer justificaciones y legitimaciones simbólicas de estas transformaciones neoliberales, que se han instalado progresivamente en las narrativas de los sujetos.

De esta manera, como es posible apreciar en los relatos ya expuestos, se observa, por una parte, en conjunto con la valorización del individuo, un progresivo desprecio a la relación que se establece con el Estado, en virtud de los significados que se asocian a su vinculación. Y, por otra parte, aparece una desconfianza con respecto a lo colectivo y a los “otros” en general. Son pocos los casos en que

Acudir a redes sociales o a instancias de carácter estatal son acciones que portan un rechazo cargado de moralidad negativa por parte de los sujetos: lo valorado es el enfrentamiento individual y, sobre todo, privado de los problemas económicos.

se recurre al barrio, la comunidad o el Estado para resolver los problemas cotidianos que los aquejan. Dicho en otros términos, acudir a redes sociales o a instancias de carácter estatal son acciones que portan un rechazo cargado de moralidad negativa por parte de los sujetos: lo valorado es el enfrentamiento individual y, sobre todo, privado de los problemas económicos. Es esa una actitud digna.

Así, en virtud del retiro del Estado, legitimado normativamente, y de la amenaza asociada a la comunidad, en situaciones de crisis económica las personas, en primer lugar, generan estrategias familiares para la resolución de problemas. Como se ha señalado para el caso de Chile, el trabajo de redes familiares es fundamental para hacer frente a las inestabilidades cotidianas (Arteaga y Martuccelli, 2012). En segundo lugar, los sujetos acuden al mercado, o al menos este es visto como una posibilidad viable y legítima, lo que significa nuevamente asumir de forma individual los riesgos y la premura económica a la que se ven enfrentadas las personas. Es más, muchas veces el mercado figura como la primera posibilidad a considerar, en consonancia precisamente con este acento en el enfrentamiento individual de problemas económicos.

Otra de las cuestiones centrales que saltan a la vista en el análisis presentado se refiere al fuerte componente no solo moral, sino también afectivo de las narrativas de los diferentes entrevistados. Lejos de configurarse como meros estados psicológicos, más bien lo que se observa es la emergencia de sentimientos morales que estructuran los diferentes discursos y que, además, se articulan socialmente. De hecho, según Honneth (1997), los individuos se constituyen a partir de relaciones de reconocimiento recíproco, determinadas por principios normativos establecidos socialmente como legítimos y asegurados por ciertas instituciones sociales. En este sentido, las expectativas de reconocimiento que los sujetos generan y, por lo tanto, consideran válidas, son aquellas que apelan a los principios de integración básicos de dicha sociedad. Cuando esta expectativa no es satisfecha, se generan sentimientos morales de injusticia y situaciones de agravio moral. El aspecto clave del planteamiento de Honneth es que, debido precisamente a esta condición, este tipo de sentimientos no tendrían un componente meramente afectivo sino también uno cognitivo: en su seno llevan principios de integración no satisfechos.

Uno de los rasgos que se repite a lo largo de los relatos elaborados por los entrevistados, es la emergencia de sentimientos de agravio moral como vergüenza, culpa y humillación en el contexto del enfrentamiento de situaciones de crisis económicas. En el marco de

En el marco de trayectorias vitales caracterizadas por la inestabilidad, recurrir al apoyo gubernamental es una alternativa que pocas veces se vislumbra posible por parte de las familias en crisis y, más bien, se evita por la estigmatización que ello puede provocar.

trayectorias vitales caracterizadas por la inestabilidad, recurrir al apoyo gubernamental es una alternativa que pocas veces se vislumbra posible por parte de las familias en crisis y, más bien, se evita por la estigmatización que ello puede provocar. La exposición pública de los problemas privados, así como la burocratización de la ayuda social, son factores que inciden en el sentido de vergüenza y humillación frente a las instituciones disponibles. La orientación focalizada de las ayudas, así como la tecnificación de los instrumentos que se aplican, aumentan la exposición de quienes las solicitan: “*ir muchas veces a la municipalidad es como ir a humillarse a pedir algo*” (G.M.A.²⁸, Marisol).

En la nomenclatura de Honneth (1997), este sentimiento de humillación revelaría una expectativa de reconocimiento no cumplida, pero exigible legítimamente, como lo es la estima social. Lo que se observa en los relatos de los entrevistados es la valoración del logro, del mérito propio, y, por sobre todo, del esfuerzo individual que, de alguna manera, dignificaría las trayectorias. Es un horizonte de valor; de principio orientador para la toma de decisiones tanto en sus vidas en general como, particularmente, en condiciones de crisis.

En este marco, uno de los espacios sociales privilegiados en los que los individuos alcanzan un reconocimiento de su identidad es en la esfera del trabajo, el cual se configura como uno de los principales espacios de socialización e integración social. En efecto, el mérito y el esfuerzo se realizan en esta área. Por ello, situaciones de crisis económica, detonadas por el desempleo, son vividas en términos de un sufrimiento moral. En consecuencia, acudir a los servicios sociales es incurrir en una situación vejatoria que es vivida afectivamente como tal, pues implica reconocerse frente a los demás como dependiente; no como alguien con competencias y capacidad de agencia, sino más bien como alguien incapaz de hacerse cargo de sus necesidades y con precariedades materiales.

No tener recursos genera, en este tipo de sociedad, un sentimiento moral de vergüenza. Por lo tanto, se tiende a una privatización de los problemas por temor a la pérdida de estatus o imagen social. En efecto, uno de los principales mecanismos de integración simbólica en el régimen neoliberal chileno se relaciona con el acceso a niveles de consumo, en términos de elementos de definición y distinción simbólica (Bourdieu, 2002; Aguilar, 2009). Por lo tanto, las crisis económicas también ponen en peligro lo que hemos denominado *la mantención de la imagen*, y lo que se busca, por lo tanto, es que “ojala nadie se dé cuenta”; o sea, *el ocultamiento de las crisis* (Arteaga y Pérez, 2011).

El lenguaje moral y afectivo al cual apelan los sujetos en sus discursos nos habla de la sociedad a la que pertenecen. Lejos de expresar meros estados psíquicos individuales, permiten, por el contrario, visibilizar los principales mecanismos de integración de la sociedad. En esta misma línea, para Butler (2010), al entrar en relación con el mundo y los seres humanos, las reacciones que estos encuentros generan son las que finalmente determinan nuestro repertorio afectivo: los afectos emergen de nuestro encuentro con los demás, sean positivos, negativos o diversos. Estos encuentros y, por tanto, “las respuestas afectivas que generamos, están invariablemente mediadas, apelan a y realizan ciertos marcos interpretativos” (Butler, 2010: 59), que básicamente son definidos por las relaciones de poder de nuestras sociedades. Desde esta perspectiva, entonces, los sentimientos como vergüenza, humillación y compasión no serían respuestas individuales, sino que más bien estarían determinadas por marcos de afectación que distinguen lo digno de lo indigno, lo valorable de lo despreciable, marcos que cambian históricamente en función de las transformaciones en las relaciones de poder de una sociedad. Desde nuestra perspectiva, como hemos intentado desarrollar, la labor del Estado y la política social ocupan un lugar clave en la conformación de estos marcos.

3. Reflexiones finales

En el presente artículo se han intentado mostrar las formas en que las orientaciones del modelo neoliberal y, más específicamente, las políticas públicas implementadas bajo dicho marco, han incidido de manera importante en las construcciones subjetivas que realizan los sectores vulnerables de sus prácticas y de su vinculación con el Estado y la sociedad. El sentido neoliberal de las políticas sociales en el país, donde se destaca el posicionamiento central del mercado en la provisión del bienestar, ha incidido en una individualización de las modalidades en que los sujetos vulnerables asumen sus inestabilidades y crisis. Las implicancias subjetivas se evidencian, entre otros aspectos, en un aumento de las significaciones negativas que se desatan a partir de eventos críticos e inestables en las familias vulnerables. Si bien existen también prácticas de subjetivación y crítica, hemos centrado el análisis en las implicancias negativas.

Respecto de las prácticas llevadas a cabo por las familias ante las crisis, destacan en general, en los grupos analizados, las redes familiares más fuertemente que las comunitarias; la responsabilización

No tener recursos genera, en este tipo de sociedad, un sentimiento moral de vergüenza. Por lo tanto, se tiende a una privatización de los problemas por temor a la pérdida de estatus o imagen social.

individual en detrimento de la solicitud de ayuda a las instituciones; y la desconfianza antes que la solidaridad. A partir del análisis cualitativo de las entrevistas a poblaciones vulnerables, ha sido posible delimitar configuraciones subjetivas relacionadas con los sentidos, discursos, significados y orientaciones emanadas del modelo socioeconómico e ideológico, y las políticas sociales desplegadas en Chile en las últimas décadas.

Si bien el sentido de algunos programas se orienta a objetivos valorables, como la disminución de la desigualdad, la vulnerabilidad y la pobreza, existen efectos no deseados que se expresan en las modalidades de construcción de sujeto, al sostener y reproducir un discurso que aleja al sujeto del sentido colectivo, de la comunidad y del Estado. Considerando que ello puede reforzar sentimientos de desconfianza, miedo, incertidumbre y angustia, sería deseable desarrollar un modelo de políticas que refuerce la confianza en la sociedad y que permita robustecer un imaginario colectivo, más que la atomización y el aislamiento. El desarrollo de un horizonte simbólico común posibilita la producción de la sociedad y el tránsito de la mera organización y administración del sistema a la posibilidad de su transformación.

Notas

(1) Proyecto Fondecyt-I N° 11090364 (2009-2011), desarrollado por un equipo interdisciplinario de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Parte de la reflexión teórica y de contexto se desarrolló en el marco del proyecto *Neoliberalismo, subjetividad y experiencias sociales en el Chile contemporáneo*, actualmente en curso, financiado por el Fondo de Innovación en Investigación de la Iniciativa Bicentenario Juan Gómez Millas, de la Universidad de Chile.

(2) Quintil hace referencia a los cinco grupos que clasifican a la población chilena por niveles de ingresos económicos: el quintil 1 corresponde al 20% de la población con menores ingresos, y el quintil 5, al 20% de mayores ingresos (www.uchile.cl).

(3) Este estudio se vinculó a su vez con una investigación complementaria, que llevó a cabo entrevistas a los jefes de hogar de las familias: *Tácticas y mediaciones subjetivas: enfrentamiento de situaciones de riesgo socioeconómico en familias urbanas vulnerables de los quintiles II y III. Una aproximación desde el discurso de los/as Jefes/as de familia*, Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, Universidad de Chile.

(4) En el presente artículo se trabaja el material cualitativo en su conjunto, sin distinciones específicas de acuerdo a los criterios de selección de la muestra, lo que se desarrolla en otros trabajos.

(5) Diversos análisis (Machinea, 2007; Ocampo, 2008; Cohen y Franco, 2006; Franco y Lanzaro, 2006) dan cuenta que existió una importante distancia entre los principios del modelo y lo que efectivamente sucedió en la práctica. Si bien la política estaba basada en un horizonte universalista, el ejercicio de derechos sociales recaía fundamentalmente en el trabajador asalariado y redes clientelares -con el objeto de asegurar estabilidad política-, en desmedro de actores con menor poder de influencia como mujeres y trabajadores informales. En este sentido, es posible hablar del sistema chileno como un “universalismo estratificado” (Filgueira, 1999), en función de los diferentes niveles de cobertura y calidad de prestaciones que recibían los ciudadanos.

(6) El gasto social descendió desde 23,9% en 1982 a 12,9% en 1989, en términos de porcentaje del PIB (Mostajo, 2000).

(7) Entre estas transferencias al sector privado destacan las sanitarias y de servicios en general (Serrano, 2005).

(8) Son entidades privadas encargadas de financiar las atenciones y beneficios de salud a las personas afiliadas y sus cargas, que cotizan el valor del plan de salud pactado.

(9) Hacia 2011, tan solo el 4% de la población se mantiene afiliado al sistema de pensiones antiguo (Robles, 2011) que, a diferencia de las AFP que funcionan con capitalización individual, tenía una modalidad de reparto.

(10) Para mayores referencias respecto al modelo, ver Larrañaga (1995).

(11) Las llamadas “medidas de ajuste” implementadas durante los 80 no hicieron sino aumentar la pobreza. Mientras que en 1969, el 17% se ubicaba bajo la Línea de la Pobreza -nivel de ingresos- y el 7% era considerando Indigente, en 1983 estos últimos ascendieron al 30%. En el año 1985, el porcentaje de pobres ascendía a 45%, el cual se mantuvo en el año 1987 (Raczynski, 2002).

(12) Desde 2007, la ficha CAS ha sido reemplazada por la Ficha de Protección Social -FPS, (Herrera ...[et al], 2012).

(13) Más referencias en http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen_obj.php [23 de febrero de 2013].

(14) En el año 2000, el gasto social ascendió al 14,95% respecto del PIB (Robles, 2011). Los aumentos más sustantivos se dieron en educación (103%) y en programas contra la pobreza (102%) (Raczynski, 2002: 18). Se mantuvo el sistema de previsión social (AFP) y el gasto en este ámbito por parte del Estado disminuyó; su peso, en términos de gasto social total, descendió del 49% en 1990 al 42% en 1999 (*ibídem*).

(15) Entre ellos destacan: el Ministerio de Planificación -hoy renombrado como Ministerio de Desarrollo Social-, encargado, entre otros, de coordinar los programas dirigidos al combate de la pobreza; el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS); el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM); el Instituto Nacional de la Juventud (INJ); la Corporación Nacional de

Desarrollo Indígena (CONADI) y el Fondo Nacional de la Discapacidad (FONADIS). Todos ellos comenzaron a implementar una serie de programas sociales en la línea de la intersectorialidad y la participación social.

(16) A nivel de los perfiles epidemiológicos y demográficos -aumento de la esperanza de vida, baja de tasas de fertilidad-; la desindustrialización y tercerización de la economía (Filgueira, 2007); las políticas laborales de desregulación, flexibilidad laboral y los fenómenos de informalidad y las situaciones de precariedad que genera; además de cambios en la fisonomía de las familias, entre los que destacan los altos niveles de monoparentalidad y jefatura femenina del hogar (Hardy, 2004).

(17) En 2008 se desarrolla una reforma al sistema de pensiones que, sin abandonar el sistema de capitalización individual, establece pensiones básicas mínimas -de alrededor de 150 dólares-, además de aportes solidarios de vejez e invalidez (véase: <http://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/reforma-previsional-principales-beneficios>).

(18) En 2005 se implementó el Plan de Acceso Universal de Garantías Explícitas (o Plan Auge), orientado a asegurar acceso, oportunidad, calidad y protección financiera en ciertas condiciones consideradas básicas y universales para toda la población, en ciertas patologías definidas como prioritarias (véase: <http://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/reforma-previsional-principales-beneficios>).

(19) Enfoque promovido por organizaciones multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo. Para mayores referencias, ver Serrano (2005) y Holzman y Jørgensen (2000).

(20) Para profundizar, ver <http://www.chilesolidario.gob.cl/sist/sist1.php>.

(21) Por tan solo señalar un ejemplo, precisamente la Ficha de Protección Social (FPS) -ya mencionada-, instrumento estandarizado encargado de seleccionar a las personas sujetos de política, funciona precisamente con esta misma lógica de identificación de activos y activos potenciales.

(22) Existen importantes discusiones respecto a los reales efectos que este tipo de programas tiene sobre el combate contra la pobreza. Si bien esta ha disminuido a un 14,4% en 2011 (CASEN, 2012), se exhibe un estancamiento. Además, un aspecto que Chile no ha podido afectar por medio de su política social son los niveles de desigualdad. Según cifras de 2009, el índice de Gini seguía siendo extremadamente alto -0,52 (Banco Mundial, 2009)-, lo que ubica a Chile dentro de los países más desiguales del mundo.

(23) E. corresponde ahora y en lo que sigue a "Entrevista".

(24) Lautier (2009) habla en estos términos a propósito del impacto de los programas de lucha contra la pobreza sobre sus beneficiarios a nivel latinoamericano. Para el caso chileno, aunque con un lenguaje distinto, existen investigaciones que arriban a conclusiones similares (Martínez y Palacios, 1996).

(25) Tal como lo señala la presentación en la *web* del programa Chile Solidario: "(el programa) genera dispositivos de vinculación y acompañamiento

para que la incorporación de los usuarios a la red de protección social redunde en un uso efectivo de la estructura de oportunidades dispuestas a través de programas, servicios y prestaciones monetarias. Para esto, Chile Solidario trabaja a través de programas propios para la vinculación y habilitación de las personas y que funcionan como dispositivos de intermediación, consejería y acompañamiento” (<http://www.chilesolidario.gob.cl/sist/sist1.php> [7 de diciembre de 2014]).

(26) Por ejemplo, el Fondo Solidario de Elección de Vivienda, destinado a “las familias más vulnerables del país”, exige un ahorro de 10 Unidades de Fomento (alrededor de 400 dólares) (www.minvu.cl/opensite_20120504121302.aspx [7 de diciembre de 2014]).

(27) Un estudio de gran envergadura para el caso chileno, también releva la dimensión del esfuerzo como un recurso utilizado por los individuos, en el marco de la definición de lo que significa ser pobre (Fundación para la Superación de la Pobreza, 2010).

(28) G.M.A. corresponde a Grupo de Mujeres Adultas (Grupo de discusión).

Bibliografía

- Aguilar, Omar (2009), “Principios de diferenciación material y simbólica en la estratificación social”, en *El arte de clasificar a los chilenos*, Alfredo Joignant y Pedro Güell (coords.), Santiago, Ediciones Universidad Diego Portales (Serie Políticas Públicas).
- Araujo, Kathya y Martuccelli, Danilo (2012), *Desafíos comunes: retrato de la sociedad chilena y sus individuos*, Santiago, LOM Ediciones. 2 t.
- Arriagada, Irma (2006), “Cambios de las políticas sociales: políticas de género y familia”, Santiago, CEPAL (Serie Políticas Sociales; N° 119).
- Arteaga, Catalina y Martuccelli, Danilo (2012), “Neoliberalismo, corporativismo y experiencias posicionales: los casos de Chile y Francia”, en *Revista Mexicana de Sociología*, Vol. 74 N° 2, pp. 275-302.
- Arteaga, Catalina y Pérez, Sonia (2011), “Experiencias de vulnerabilidad: de las estrategias a las tácticas subjetivas”, en *Revista Universum*, Vol. 26 N° 2, pp. 67-81.
- Banco Mundial (2009), Base de datos, Washington, Banco Mundial, <http://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI>, 22-02-2014.
- Bourdieu, Pierre (2002), *La distinción: criterios y bases sociales del gusto*, México, Taurus.
- Butler, Judith (1998), “Soberanía y actos de habla performativos”, en *Acción*

- paralela: ensayo, teoría y crítica de la cultura y el arte contemporáneo*, N° 4, <http://www.accpa.org/numero4/>.
- _____ (2010), *Marcos de guerra: las vidas lloradas*, Buenos Aires, Paidós.
- Canales Cerón, Manuel (2006), *Metodologías de investigación social*, Santiago, LOM Ediciones.
- CASEN (2012), *CASEN 2011. Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional: informe de resultados*, Santiago, Ministerio de Desarrollo Social, http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/layout/doc/casen/publicaciones/2011/CASEN_2011.pdf, 07-12-2014.
- CEPAL (2000), *Equidad, desarrollo y ciudadanía*, Santiago, CEPAL.
- _____ (2006), *La protección social de cara al futuro: acceso, financiamiento y solidaridad*, Santiago, CEPAL.
- Cohen, Ernesto y Franco, Rolando (2006), *Gestión social: cómo lograr eficiencia e impacto en las políticas públicas*, México, CEPAL, Siglo XXI.
- Fernández, Juan (2013), "Movimiento estudiantil en Chile (2011): repertorios de acción, marcos de acción colectiva, impactos y desafíos para la política pública", en *Revista Circunstancia*, Año 9 N° 31.
- Filgueira, Fernando (1998), "El nuevo modelo de prestaciones sociales en América Latina: eficiencia, residualismo y ciudadanía estratificada", en *Ciudadanía y políticas sociales*, Brian Roberts (ed.), San José, FLACSO, SSRC.
- _____ (1999), "Tipos de *welfare* y reformas sociales en América Latina: eficiencia, residualismo y ciudadanía estratificada", documento presentado en el Seminario A Reforma da Administração Pública no Brasil: Possibilidades e Obstáculos, Fundação Joaquim Nabuco, Recife, <http://www.inau.gub.uy/biblioteca/modelo%20figueroa.pdf>, 07-12-2014.
- _____ (2007), "Cohesión, riesgo y arquitectura de protección social en América Latina", en *Cohesión social en América Latina y el Caribe: una revisión perentoria de algunas de sus dimensiones*, Ana Sojo y Andreas Uthoff (eds.), Santiago, CEPAL (Colección Documento de Proyecto).
- Foucault, Michel (2007), *Nacimiento de la biopolítica*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
- Fraile, Lydia (2009), "La experiencia neoliberal latinoamericana: políticas sociales y laborales desde el decenio de 1980", en *Revista*

- Internacional del Trabajo*, Vol. 128 N° 3, pp. 235-255.
- Franco, Rolando y Lanzaro, Jorge (2006), “Política y políticas públicas: determinación y autonomía”, en *Política y políticas públicas en los procesos de reforma en América Latina*, Rolando Franco y Jorge Lanzaro (coords.), Buenos Aires, Naciones Unidas; Miño y Dávila Editores.
- Fundación para la Superación de la Pobreza (2010), *Voces de la pobreza: significados, representación y sentir de personas en situación de pobreza a lo largo de Chile*, Santiago, Fundación para la Superación de la Pobreza, http://www.superacionpobreza.cl/wp-content/uploads/2014/01/libro_voces.pdf, 07-12-2014.
- Garretón, Manuel Antonio (2007), “Matriz sociopolítica y desarrollo socioeconómico en Chile”, Manchester, University of Manchester. School of Environment, Education and Development. Institute for Development Policy and Management. Research Programme Consortium on Improving Institution for Pro-Poor Growth (Discussion Paper Series; N° 15).
- _____ (2012), *Neoliberalismo corregido y progresismo limitado: los gobiernos de la Concertación en Chile 1990-2010*, Santiago, Universidad ARCIS, CLACSO.
- Grau, Olga; Delsing, Riet; Brito, Eugenia; y Farías, Alejandra (1997), *Discurso, género, poder*, Santiago, LOM Editores.
- Hall, Anthony y Midgley, James (2004), *Social Policy for Development*, Thousand Oaks, SAGE.
- Hardy, Clarisa (2004), “Sociedades latinoamericanas y políticas sociales”, en *Equidad y protección social: desafíos de políticas sociales en América Latina*, Clarisa Hardy (ed.), Santiago, LOM Editores.
- Herrera, Rodrigo; Larrañaga, Osvaldo; y Telias, Amanda (2012), *La ficha de protección social*, Santiago, PNUD (Documento de Trabajo).
- Holzman, Robert y Jørgensen, Steen (2000), “Manejo social del riesgo: un nuevo marco conceptual para la protección social y más allá”, Washington, Banco Mundial (Documento de Trabajo; N° 0006).
- Honneth, Axel (1997), *La lucha por el reconocimiento: por una gramática moral de los conflictos sociales*, Barcelona, Grijalbo Mondadori.
- Íñiguez, Lupicinio (2003), *Análisis del discurso: manual para las ciencias sociales*, Barcelona, Editorial Universitat Oberta Catalunya.
- Jodelet, Denise (1984), “Représentation sociale: phénomènes, concept et

- théorie, en *Psychologie sociale*, Sergei Moscovici (comp.), Paris, Presses Universitaires de France.
- Klein, Naomi (2007), *La doctrina del Shock*, Barcelona, Paidós.
- Larrañaga, Osvaldo (1995), “Descentralización de la educación en Chile: una evaluación económica”, en *Revista Estudios Públicos*, N° 60, pp. 244-286.
- Lautier, Bruno (2009), “Gouvernement moral des pauvres et dépolitisation des politiques publiques en Amérique Latine”, en *Penser le politique en Amérique Latine: la récréation des espaces et des formes du politique*, Natacha Borgeaud-Garciandía, Bruno Lautier, Ricardo Peñafiel y Ania Tizziani (eds.), Paris, Karthala.
- Lechner, Norbert (2002), *Las sombras del mañana*, Santiago, LOM Ediciones.
- León, Arturo y Martínez, Javier (2011), *La estratificación social chilena hacia fines del siglo XX*, Santiago, CEPAL (Serie Políticas Sociales).
- Machinea, José Luis (2007), “El financiamiento de la protección social: condición indispensable para un pacto de cohesión social en América Latina”, en *Cohesión social en América Latina y el Caribe: una revisión perentoria de algunas de sus dimensiones*, Ana Sojo y Andras Uthoff (eds.), Santiago, CEPAL.
- Martínez, Javier y Palacios, Margarita (1996), *Informe sobre la decencia: la diferenciación estamental de la pobreza y los subsidios públicos*, Santiago, Ediciones Sur, http://surcorporacion.cl/publicaciones/Coleccion_Estudios_Sociales/Martinez/informe_sobre_la_decencia.pdf, 08-12-2014.
- Martínez-Guzmán, Antar e Íñiguez, Lupicinio (2010), “La fabricación del trastorno de identidad sexual: estrategias discursivas en la patologización de la transexualidad”, en *Discurso y Sociedad*, Vol. 4 N° 1, pp. 30-51.
- Martuccelli, Danilo (2007), *Cambio de rumbo*, Santiago, LOM Editores.
- Mayol, Alberto y Azócar, Carla (2011), “Politización del malestar, movilización social y transformación ideológica: el caso ‘Chile 2011’”, en *Polis*, Vol. 10 N° 30, pp. 11-19.
- Meller, Patricio (2000), “Pobreza y distribución del ingreso en Chile (década del 90)”, Santiago, Universidad de Chile. Centro de Economía Aplicada (Documento de Trabajo; N° 69), <http://econpapers.hhs.se/paper/edjceauch/69.htm>, 23-05-2014,
- Meller, Patricio y Solimano, Andrés (1984), “Desempleo en Chile: interpretación y políticas económicas alternativas”, en

- Reconstrucción económica para la democracia*, VV. AA., Santiago, Aconcagua; Corporación de Estudios para Latinoamérica.
- Mostajo, Rossana (2000), “Gasto social y distribución del ingreso: caracterización e impacto redistributivo en países seleccionados de América Latina y el Caribe”, Santiago, CEPAL (Serie Reformas Económicas; N° 69).
- Ocampo, José Antonio (2008), “Los paradigmas del desarrollo en la historia latinoamericana”, en *Hacia la revisión de los paradigmas del desarrollo en América Latina*, Óscar Altimir, Enrique V. Iglesias y José L. Machinea (eds.), Santiago, Secretaría General Iberoamericana; CEPAL, http://www.ccee.edu.uy/.../Ocampo%20_2006_%20Paradigmas%20de%20desarrollo.pdf, 08-12-2014.
- Paugam, Serge (1991), *La disqualification sociale*, Paris, Presses Universitaires de France.
- Polanyi, Carl (2007), *La gran transformación: los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
- Quintral, Máximo (2012), “Estado, mercado y sociedad en el Chile de los noventa: ¿la herencia de un ‘modelo de modernización’ autoritario?”, en *Atenea*, N° 506, pp. 97-119.
- Raczynski, Dagmar (2002), “Políticas sociales y de superación de la pobreza de Chile”, documento presentado en la Universidad de Texas, Austin, 28 de febrero, <http://lanic.utexas.edu/project/laoap/claspo/dt/0005.pdf>, 23-02-2014.
- Riesco, Manuel (2009), “El modelo social chileno comienza a cambiar”, en *Revista Internacional del Trabajo*, Vol. 128 N° 3, pp. 311-330.
- Robles, Claudia (2011), “El sistema de protección social de Chile: una mirada desde la igualdad”, Santiago, CEPAL (Documento de Proyecto).
- Serrano, Claudia (2005), “Claves de la política social para la pobreza”, documento del Proyecto FONDECYT N° 104206, desarrollado por Asesorías para el Desarrollo, <http://www.unesu.org/piapobreza/Lectura7.pdf>, 22-02-2014.
- Simmel, George (2002), “El pobre”, en *Sobre la individualidad y las formas sociales*, George Simmel (ed.), Buenos Aires, Ediciones de la Universidad Nacional de Quilmes.
- Strauss, Anselm y Corbin, Juliet (2002), *Bases de la investigación cualitativa: técnicas y procedimientos*

- para desarrollar la teoría fundamentada*, Medellín, Editorial Universidad de Antioquia.
- Wormald, Guillermo y Torche, Florencia (2004), “Estratificación y movilidad social en Chile: entre la adscripción y el logro”, Santiago, CEPAL (Serie Políticas Sociales; N° 98).